Capítulo 7

Volvemos y somos millones: los ciclos de resistencia en Ecuador

Sofia Lanchimba Velastegui

Resumen

El presente trabajo tiene como finalidad esbozar los ciclos de resistencia que se han desplegado durante las últimas tres décadas en Ecuador, me concentro fundamentalmente en el movimiento indígena. El eje de análisis es la conflictividad que articula la movilización social. Para analizar la reconfiguración de la movilización en torno a los conflictos de cada momento uso una perspectiva procesual. Las movilizaciones más significativas en términos de intensidad, actores movilizados y las coagulaciones de esas demandas funcionan como índices para construir los ciclos. La intensificación de la conflictividad emana de la reducción de derechos y precarización de la vida en general que han significado la implementación de programas neoliberales. Durante estos años han existido tres ciclos: 1) Desde las intensas movilizaciones que incluyeron la caída de presidentes a la instalación de la Constituyente (1990-2008), 2) Desde la recomposición de las fuerzas sociales en torno a conflictos territorializados a la explosión de una nueva resistencia al neoliberalismo (2008-2019) y 3) Conflictividad en curso (2019 al presente).

Palabras clave: sociología política, conflicto político, movimiento social.

Citar como:
Lanchimba Velastegui, S. (2023). Volvemos y somos millones: los ciclos de resistencia en Ecuador. En F. Parra y M. Cristeche. (Eds.). *Desigualdades, resistencias y derechos en Latinoamérica y el Caribe* (pp. 187-206) Religación Press. http://doi.org/10.46652/religacionpress.22.c37

OPEN ACCESS

"Somos las hijas de Mama Tránsito y Dolores Cacuango que no pudiste MATAR"

Pancarta en las movilizaciones de octubre de 2019

En 1973, la CIA en uno de sus informes sobre Ecuador reportaba que la población indígena era apática e insular, por tanto, no representaban ningún peligro de orden político. No obstante, le preocupaba que la creciente integración nacional –que producía la modernización de los sesenta y setenta– pudiera conectar a la población indígena con grupos subversivos y que la expansión de la frontera petrolífera los orillaría a la integración o al conflicto (CIA, 1973b). "Abrumado por una pobreza que requiere virtualmente toda su energía simplemente para la subsistencia, el indio, tradicionalmente analfabeto y apático, tiene poco sentido de la nacionalidad[1]" (CIA, 1973a). La movilización social del siglo XXI, de alguna manera, ha sido un esfuerzo sistemático para desmontar cada una de esas afirmaciones.

Ecuador es uno de los espacios más prolíficos en expresiones de movilización social. Diversos actores surgen y van tomando la posta incluso en los ciclos de repliegue. El sello inconfundible del país es el movimiento indígena, que se ha ganado la fama de ser de los movimientos sociales más potentes de Latinoamérica, organizado principal, pero no exclusivamente, en la CONAIE[2], una estructura indígena de carácter nacional. Su capacidad de movilización, el contenido de su programa político, su capacidad de asumir la dirección del bloque popular en coyunturas críticas y la posibilidad de reinventarse en cada nuevo ciclo lo convierte en el actor más importante a la hora de articular la movilización y como el principal contradictor del Estado.

1 La traducción del inglés al español es propia.

2 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. A diferencia de otras organizaciones, la CONAIE tiene mayor presencia social por el número de bases y por el reconocimiento en el escenario nacional.

Los principales rasgos que permiten comprender la fertilidad de la movilización en Ecuador son, por un lado, la existencia de estructuras organizativas capaces de sostener y gestionar la movilización social cuando esta estalla y una reserva de politización de baja intensidad que se activa en momentos de crisis, es decir, una capacidad de resistencia y de movilización presente en el tejido social que existe de manera difuminada, como fue evidente en las movilizaciones del 2019. Ahí reside la capacidad de resistencia al neoliberalismo que se ha desplegado en las últimas tres décadas. Por otro lado, la débil formación estatal abre una grieta para la disputa política en las calles. Esto permite que el terreno de "lo político" se dispute por fuera de las formas institucionales. Las situaciones de crisis y movilización producen un espacio privilegiado para la apertura de procesos de subjetivación política que permite la constitución y reconstitución de los sujetos colectivos.

En términos de movilización, el siglo XXI comenzó en 1990. Mientras los sindicatos y las identidades politizadas alrededor de la matriz de clase estaban en repliegue, otros movimientos sociales emergían. En estos años podemos marcar un ciclo de avanzada que adquiere un carácter nacional conforme se enfrenta al neoliberalismo (1990-2008) y otro de repliegue que encontró en el territorio una trinchera de recomposición (2008-2019). Las últimas movilizaciones masivas –octubre de 2019– abren un nuevo ciclo con carácter nacional frente a una nueva arremetida del neoliberalismo.

Cuatro movilizaciones funcionan como indicios de composición y recomposición de fuerzas organizativas, programas y ciclos: el primer levantamiento indígena contemporáneo (1990), la movilización en la que el movimiento indígena asume la dirección del campo popular frente al neoliberalismo y que se sintetiza en la consigna "Nada solo para los indios" (2001), la "Marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos" que da cuenta de un giro y reconfiguración de las demandas, esta vez en contra de la mega minería (2012) y la movilización más importante en la historia contemporánea por su masividad, duración, in-

tensidad del conflicto y heterogeneidad de actores que logran articularse alrededor de un nuevo enfrentamiento al neoliberalismo (2019). Las movilizaciones de mayor intensidad –noventa y 2019– se corresponden con los años en los que los efectos del neoliberalismo son sentidos en la población en general.

De la emergencia a la coagulación de demandas: 1990-2008

En este ciclo la movilización tiene rasgos de carácter nacional y se define por su resistencia al neoliberalismo. En un primer momento, el movimiento indígena experimenta la organización y estructuración de sí mismo. Este empieza con el levantamiento de 1990, sigue con el afianzamiento de su estructura y la acumulación de experiencia política con las siguientes movilizaciones y cierra en 1996 con la creación del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), partido político con el que podrá participar en elecciones. En esta primera parte la CONAIE estructura su proyecto político (1994) al calor de la movilización.

El segundo momento va a estar caracterizado por la progresiva dirección intelectual y moral del campo popular y que se explicita en la consigna del 2001 "nada sólo para los indios" y, aunque, habrá momentos de baja –después de su participación en el Gobierno de Lucio Gutiérrez– logra una considerable influencia en la Constituyente del 2007-2008. Varias de las demandas que se habían construido en medio de la movilización social en los años precedentes logran su constitucionalización. Durante las tres últimas décadas, su irrupción en la vida nacional ha posibilitado cambios no sólo a pueblos y nacionalidades indígenas, sino también, al conjunto de la sociedad. Es decir, su presencia en la escena nacional a través de sus organizaciones y sus acciones políticas han ampliado los márgenes democráticos.

La inestabilidad política y la falta de legitimidad de los partidos políticos de los años noventa contribuyeron para que los movimientos sociales tuvieran un gran protagonismo y capacidad para perfilar obje-

tos de disputa política. Los problemas planteados por los movimientos sociales no podían ser procesados por unas instituciones políticas en crisis y con carencia de legitimidad y que por lo mismo las desbordan. La implementación del modelo neoliberal encuentra resistencias en Ecuador y se convierte en el eje que articula la movilización. Si bien el movimiento indígena marca el ritmo, no es el único actor movilizado; estudiantes, trabajadores, mujeres, comerciantes, transportistas, ecologistas, entre otros, también nutren la resistencia.

El primer levantamiento indígena contemporáneo se dio en 1990. Fue el punto de partida para las movilizaciones de los noventa, pero también un punto de llegada que daba cuenta de las transformaciones y acumulación organizativa que acarreaba desde la década de los setenta. Este levantamiento fue un acontecimiento de quiebre en el escenario nacional y en la historia reciente del país. Hasta 1994 pervive la demanda histórica por tierra y reforma agraria que había caracterizado al movimiento desde los años veinte en que se forman los primeros sindicatos agrarios y que había cobrado fuerza en los sesenta y setenta en medio de la radicalización a la izquierda que vive el continente.

En los noventa, el movimiento indígena fue capaz de articular las demandas de otros sectores subalternos frente al neoliberalismo. Fue una década muy intensa para el movimiento, su consolidación se reflejaba en las masivas movilizaciones que paralizaban al país generando adhesiones de otros sectores, de la opinión pública y siendo una fuerza destituyente considerable que incidía en la caída de gobiernos.

Si bien denuncian la histórica exclusión del Estado-Nación y demandan su reconocimiento como nacionalidades, como sujetos políticos colectivos; las demandas no se quedan en el ámbito del reconocimiento de la diferencia. Claramente establecen que el "problema del indio" "no es únicamente un problema pedagógico, eclesiástico o administrativo como señalan los sectores dominantes; sino que fundamentalmente es un problema económico-político estructural, y por lo mismo un pro-

blema nacional y que para solucionarlo requiere el concurso de toda la sociedad" (CONAIE, 1994). Esta definición del problema los lleva a plantear:

> Nuestra meta no es la simple toma del poder o gobierno sino la transformación de la naturaleza del actual poder del Estado Uninacional hegemónico, excluyente, antidemocrático y represivo; y construir la Nueva Sociedad Humanista Plurinacional. ***Nuestra lucha es una opción frontal contra el sistema económico, político e ideológico capitalista hegemónico, represivo y escIavisante***[3] [sic] tanto nacional como internacional que impide la Autodeterminación, y la Independencia económica y política de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, y de los demás sectores sociales del Ecuador. (CONAIE, 1994)

Esta primera oleada genera una respuesta desde arriba: el multiculturalismo neoliberal. Es decir, el proyecto cultural "que abre espacios de participación indígena y al mismo tiempo genera límites que abortan sus aspiraciones más transformadoras" (Hale, 2004, p. 56). Lo que para Hale y Millaman se condensa en la idea del "indio permitido". En otras palabras, aquel que puede ser incluido y actuar en los términos impuestos por el neoliberalismo. "El neoliberalismo permite, es más, alienta la organización indígena, siempre y cuando ésta no acumule poder suficiente para representar un desafío directo al poder estatal." (Hale, 2004, p. 60).

En Ecuador, la expresión del multiculturalismo neoliberal se dio por dos vías: la Constitución de 1998 y el Proyecto de Desarrollo para los Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE) financiado por el Banco Mundial. De esta manera se constitucionalizaron los derechos colectivos y se fomentó la generación de profesionales expertos dependientes de las ONG's. En otras palabras, el multiculturalismo neoliberal permitió la agencia de indígenas incluso en altos cargos estatales o a través de proyectos financiados directamente por organismos neoliberales.

3 El énfasis es de la autora.

La relativa "gobernabilidad" permitida por las políticas multiculturalistas hizo posible que los gobiernos impulsen políticas de ajuste económico. Es decir, la multiculturalidad se impuso en un escenario de aumento de la pobreza y desmantelamiento del Estado. Por lo que, aunque se formó una capa de expertos y técnicos onegeístas, no cambiaron la situación de exclusión de la mayoría de la población indígena, sino que incrementaron su empobrecimiento. La ola multiculturalista de los noventa dejó grandes deudas con el movimiento indígena. Su intento de inclusión cultural e identitaria no fue posible y se mantuvo el racismo. Dentro de todo, hay que rescatar que esta ola significó un primer reconocimiento de los pueblos indígenas en los marcos institucionales.

Las movilizaciones le dieron al movimiento un reconocimiento social, sin embargo, tenían límites en la posibilidad de concretar transformaciones. Se producen, entonces, intensos debates sobre la participación política en la arena institucional. Así, en 1996 se creó el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP).

> Pachakutik surgió después de años del debate en torno a la participación indígena en la política electoral y cómo hacerlo: ¿podrían lograr sus objetivos de justicia social como movimiento social o como un partido político? Si se dedicaban a la política electoral, ¿deberían los movimientos indígenas presentar sus propios candidatos o apoyar a los partidos existentes cuyas plataformas eran afines a sus demandas? Pachakutik representó el surgimiento de una tercera opción: la formación de un nuevo movimiento político a través del cual los indígenas y otros sectores de los movimientos populares se organizaron como iguales y crearon un proyecto conjunto para lograr objetivos comunes en busca de un mundo nuevo y mejor. (Becker, 2015, p. 3)

Pachakutik constituyó el medio real para contender en elecciones formales. Esta estrategia le permitió ganar algunos gobiernos locales y generar distintas experiencias políticas. Aunque en los últimos años se ha operado una autonomización del partido frente al movimiento y han

mantenido una relación compleja, por decir lo menos; en las elecciones de 2021 Pachakutik capitalizó en votos el reconocimiento que el movimiento había ganado en las calles en el 2019. Logró una histórica votación para presidente en la primera vuelta –casi 20%– y para asambleístas, convirtiéndose en la segunda fuerza en el poder legislativo.

A inicios de los años dos mil, el movimiento indígena ya se había instalado en el espacio público y articulaba las demandas que preocupaban a la mayoría de los ecuatorianos. El eje de la movilización del 2001 era la resistencia a las políticas neoliberales. Bajo el lema "nada sólo para los indios" pretendía construir una agenda política amplia con otros sectores subalternos. En ese año las demandas se centran en "políticas públicas, demanda de recursos para los gobiernos locales, recuperación de la ética en la política, capitalización del Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional, al tiempo que pierden peso visible las demandas de reforma política más general" (Chiriboga, 2001, p. 30).

Durante este tiempo se produce una diversificación de estrategias políticas, por un lado, como movimiento asume la dirección del campo popular y estructura su programa en torno al antineoliberalismo. Por otro, se produce una ocupación del Estado –participación en el gobierno de Lucio Gutiérrez, en los gobiernos locales, legislativo–. Son años de condensación y coagulación institucional cuya máxima expresión es la Constituyente de 2007-2008.

Para las elecciones del 2002 el movimiento indígena acordó un pacto con Lucio Gutiérrez. Cuando la alianza ganó, el movimiento indígena pasó a formar parte del gabinete inicial del gobierno electo, concretamente, estuvo en la dirección de tres ministerios: de agricultura, de bienestar social y relaciones exteriores. Su participación duró alrededor de siete meses (entre enero y julio de 2003) y tuvo altos costos políticos, pues trajo consigo la deslegitimación de sus principales dirigentes. "La legitimidad ganada en duras luchas en contra del sistema oligárquico se vio desgastada en los escasos meses de coparticipación en el gobierno

de Gutiérrez" (Instituto Científico de Culturas Indígenas-ICCI, 2005). Finalmente, Lucio Gutiérrez fue derrocado a los dos años de haber iniciado su gobierno (2005). A diferencia de lo que había sucedido en la década de los noventa, el movimiento indígena fue el gran ausente. "Los forajidos" –sectores de clase media sin orientación política– fueron los que protagonizaron la salida de Gutiérrez.

Desde la década de los ochenta, sucesivos gobiernos aplicaron medidas de ajuste estructural demandadas por el capital transnacional: recortes sociales, reformas laborales que precarizaron las condiciones de trabajo, privatización de empresas públicas estratégicas (petróleo, electricidad, telecomunicaciones) y eliminación de subsidios (gas, combustibles y electricidad).

> El país experimentó uno de los procesos de empobrecimiento más acelerados de la historia de la región y una acelerada concentración de la riqueza: mientras en 1990 el 20% más pobre recibía 4,6% de los ingresos, en 2000 captaba menos de 2,5%; en el mismo periodo, el 20% más rico incrementó su participación de 52% a más de 61%. (Martín-Mayoral, 2009, p. 130)

Luego de década y media de estar en las calles y de haber instalado la resistencia al neoliberalismo como el principal eje de articulación, varios sectores buscaban la recuperación y fortalecimiento de un Estado capaz de garantizar derechos y bienestar al conjunto de la población y que evite la privatización transnacional de los recursos y, para ello, un Estado que regule la economía.

Para el año 2006 –a pesar de la debilidad que había mostrado el movimiento indígena en los años precedentes– logró una nueva convocatoria masiva. El lema de estas movilizaciones era: "NO al TLC[4], SÍ a la Vida. Asamblea Constituyente con todos los poderes". La demanda por una Asamblea Constituyente no era nueva, ya estaba presente en el proyecto político de 1994. Así,

4 Tratado de Libre Comercio que se pretendía firmar con Estados Unidos.

> …entre 2005 y 2006 obligó al Gobierno a cancelar definitivamente las negociaciones del TLC y a declarar la caducidad del contrato de explotación petrolera con la transnacional estadounidense OXY. Al calor de aquellas luchas, la CONAIE no solo consiguió movilizar a sus tradicionales organizaciones de base, sino que sumó otras nuevas. (Becker, 2015, p. XX)

La resistencia al TLC muestra un rebrote organizativo y un giro programático. Esta resistencia estaba en contra de los medios de apropiación de la naturaleza, la biodiversidad, los recursos naturales y las fuentes de agua. Es decir, articular la lucha frente al TLC significó que las demandas en torno a la naturaleza y los recursos naturales cobren relevancia.

La disputa política que habían dado en las calles para ser reconocidos como sujetos políticos pasa a un nuevo momento y la dirección pasa a otros actores durante la Constituyente que se lleva a cabo en 2007 y 2008. Y aunque no son los actores que definirán el contenido constitucional, la resistencia al neoliberalismo que habían instalado los movimientos sociales ya está presente en sectores progresistas que integrarán la Asamblea (Lanchimba Velastegui, 2016).

La CONAIE, además, prepara una propuesta que está fuertemente influenciada por la lucha contra el neoliberalismo y la necesidad de contar con respuestas nacionales. La propuesta incluye planteamientos sobre: Estado plurinacional, régimen político, modelo económico y derechos, garantías y deberes. De estos, el más desarrollado es el acápite sobre el modelo económico. En este hay que destacar la idea de fortalecimiento del Estado presente en la propuesta:

> El Estado deberá organizar, planificar y evaluar los impactos de las políticas económicas. Para ello debe constituirse un poderoso Consejo Nacional de Planificación. Fortalecer el control y la participación social sobre ese mismo Estado para garantizar el respeto a las necesidades de la comunidad. (CONAIE, 2007, p. 25)

No se delineaba un reforzamiento del Estado en detrimento de la organización social. Se proyectaba una recuperación del Estado capaz de garantizar derechos y contrapuesta al modelo neoliberal. A lo largo del documento están presentes las tensiones entre las demandas propias y las nacionales.

La propuesta de la CONAIE no se discutió desde el inicio en la Asamblea, lo que llevó a la organización a priorizar temas e influir en ciertas mesas de discusión. Los temas priorizados fueron: el agua, conflictos ambientales, plurinacionalidad, autogobierno y territorio, y modelo económico. Dicha priorización da cuenta de los intereses del movimiento. Se priorizan dos temas ligados a los recursos naturales –agua y conflictos ambientales–. Uno que responde al contexto neoliberal que vivía el país y pretendía desmontarlo –modelo económico–. Y otro que recoge las demandas históricas del movimiento –plurinacionalidad, autogobierno y territorio–.

En los temas priorizados, las mesas de discusión en las que participó más activamente y las movilizaciones en rechazo a la minería a gran escala que protagonizó mientras se daba la Asamblea Constituyente ya se observa el giro hacia temas de biodiversidad. Estas acciones son precedentes de la conflictividad que se activará en los años de reflujo alrededor del uso del agua, la explotación minera y, por ello mismo, en torno al territorio.

El proceso de reforma que vivió Ecuador durante el proceso constituyente es heredero de la discusión iniciada por el movimiento indígena. Su influencia no sólo está presente en la incorporación de temáticas propias –reconocimiento de pueblos y nacionalidades, circunscripciones territoriales indígenas, justicia indígena, por ejemplo– sino también en otras formas que exigen pensar nuevas relaciones entre el campo social y el político, por ejemplo, la democracia participativa y el autogobierno comunitario. En suma, el movimiento indígena ha ampliado el espectro de demandas progresistas y ha permitido pensar en hipótesis

de transformación ligadas a la constitución de un Estado Plurinacional o la posibilidad de imaginar modernidades alternativas.

Ecuador se convirtió en un ejemplo de cómo se producen coagulaciones jurídicas de demandas nacidas desde los movimientos sociales. Como resultado del proceso constituyente varios conceptos se han filtrado al escenario global de resistencia: Buen Vivir (Sumak Kawsay), derechos de la naturaleza, Estado Plurinacional, interculturalidad, autogobierno indígena, reconocimiento del territorio, procesos constituyentes, democracia participativa, democracia comunitaria, etc.

La constitucionalización de ciertas demandas ha servido de base para la construcción y elaboración de nuevos objetos de disputa y estrategias que amplían el repertorio de acción de los movimientos sociales. La Constitución, por ejemplo, reconoce que Ecuador es un Estado Plurinacional, lo que permite avanzar en la discusión de qué significa eso y cómo llevarlo a cabo. El uso del derecho a la resistencia –constitucionalizado– o la invocación de los derechos de la naturaleza son ejemplos de un uso del derecho desde los movimientos sociales. Sin embargo, la coagulación jurídica de ciertas demandas encuentra límites cuando la correlación de fuerzas no le son favorables. Las leyes pierden cualquier tipo de posibilidad de reforma si no están acompañadas de una fuerza social que las convierta en realidad. Así, las batallas ganadas durante los primeros años de la constituyente se han ido revirtiendo en los años siguientes. En política, como se sabe, ninguna victoria es definitiva, como tampoco la derrota.

En resumen, durante los años dos mil se produce un proceso de absorción de la fuerza social instituyente –que se había producido en los noventa– al campo político institucional por distintas vías: participación en gobiernos nacionales, en los gobiernos locales, como legisladores o funcionarios públicos de distinto rango y la constitucionalización de varias de las demandas. Paralelamente se produce una reestructuración de la institucionalidad política, ampliación y fortalecimiento del

Estado que recupera la confianza y el monopolio de la política. Las condiciones de gobernabilidad contienen el conflicto y reducen la participación incontrolada de las masas. En este nuevo momento, los únicos actores reconocidos para disputar la política son los partidos políticos.

Recomposición en el territorio: 2008-2019

Este ciclo está marcado, por un lado, por un repliegue institucionalizado –varios dirigentes sociales pasaron a la política institucional o a formar parte de ONG's– y, por otro, por la recomposición del movimiento a través de una actuación territorial y situada en los espacios de conflicto y la formación de nuevas dirigencias a partir de las dinámicas locales y que serán visibles en las movilizaciones del 2019.

La conflictividad permanece, pero baja la intensidad. La "Marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos" del año 2012 pone en evidencia el centro de malestar en este nuevo ciclo: la minería a gran escala. Tres años después, la "Marcha por la vida y la dignidad" del 2015 ofrece otras fuentes de conflicto: cierre de escuelas de educación bilingüe, ley de tierras, la defensa del Instituto de Seguridad Social y el libre ingreso a la Universidad. Las contradicciones que emergieron después de la Constituyente del 2008 se convertirán en la fuente de la que emanen los sectores movilizados en el 2019.

Si en los noventa la conflictividad tenía un carácter nacional, en estos años la conflictividad estará territorializada alrededor de la ampliación de la frontera extractiva y articulada alrededor de la defensa del territorio –como en otras expresiones sociales a nivel latinoamericano y mundial–. Se multiplican las resistencias en defensa del agua y el territorio frente a la profundización de la extracción petrolera y alrededor de los proyectos mineros.

El gobierno de Rafael Correa se alejó de la política neoliberal, por tanto, la resistencia al neoliberalismo deja de ser el eje de articulación de la protesta. Si bien el neoliberalismo sale de escena no lo hace el extracti-

vismo. En este caso las afectaciones están situadas en localidades rurales y territorios indígenas, lo que ha dificultado establecer una estrategia de movilización social nacional, pues, los sectores urbanos y sectores medios no sienten afectados sus intereses.

Las manifestaciones de este ciclo iniciaron en 2009 contra la ley que abría paso a la minería a gran escala en Ecuador. Asimismo, habrá otros eventos de alta conflictividad, el más importante fue la recuperación del territorio shuar de Nankintz que había sido despojado para otorgárselo a la empresa minera EcuaCorriente S.A. (ECSA) en el año 2016. La respuesta desde el gobierno fue la militarización del territorio.

Las políticas económicas y sociales que pudieron sostenerse gracias al precio del petróleo son insostenibles desde la crisis de los *commodities* (2014). La caída del precio del petróleo afecta enormemente a un país absolutamente dependiente del mercado internacional. De a poco, pero de manera sostenida regresan las medidas neoliberales: reducción del Estado, precarización de las condiciones laborales, contratación de una enorme deuda pública, despido masivo de funcionarios estatales, etc. La gota que derramó el vaso fue la eliminación del subsidio de la gasolina (2019).

La apertura de un nuevo ciclo

En octubre de 2019, Ecuador vivió intensas jornadas de manifestación que duraron once días y que fueron la respuesta a un conjunto de medidas neoliberales adoptadas por el gobierno de Lenin Moreno. De estas la que más llamó la atención en inicio fue el incremento del precio del combustible en un contexto de precarización de la vida en general, incremento del desempleo y la pobreza. Varios actores participaron, entre los cuales predominó el movimiento indígena. Estas movilizaciones abrieron un nuevo ciclo de carácter nacional y la participación de varios actores alrededor de la resistencia a un renovado intento por aplicar la

agenda neoliberal. Se produce un recambio generacional en el movimiento indígena, surgen nuevos liderazgos y las condiciones de posibilidad de constitución de una nueva generación que se forje al calor de la conflictividad y la crítica.

Hay una combinación de coyuntura y proceso. Si bien las movilizaciones fueron inesperadas, hay que relativizar el carácter espontáneo de la movilización, hay una procesualidad del conflicto de corto y largo alcance, una experiencia de resistencia que se configura y hereda los ciclos de movilización y activación política de los noventa, esta vez, también en contra de las medidas neoliberales. Las consignas lo sintetizan: "somos hijos del primer levantamiento".

> Al pasar los días y ver las realidades creo que muchos jóvenes se vieron tocados por todo y les llegó al corazón. Los últimos días pude ver a mis wambras[5] cotacachis y a muchos jóvenes a nivel nacional tomar conciencia de que hay realidades que debemos cambiar. (Túquerrez, 2020)

Las movilizaciones de ese año adquieren las capacidades organizativas y de dirección acumuladas durante los últimos 30 años. La resistencia se teje junto a una memoria corta que lo proyecta como un "segundo levantamiento indígena". Para ello ha sido clave contar con una estructura organizativa que gestiona y encauza la protesta y, en los momentos álgidos, la sostiene. La memoria larga también está presente, el hashtag #VolvemosYSomosMillones[6] fue tendencia en Twitter en esos días. Como evento político de gran magnitud ofrece momentos que alumbran las estrategias futuras: la interseccionalidad clase-etnia-género se obser-

5 "Wambra" significa joven en kichwa.

6 El hashtag #VolvemosYSomosMillones fue tendencia en Twitter durante las movilizaciones del 2019. Refiere a una frase que se atribuye a Túpac Amaru II, líder de la mayor revuelta indígena que enfrentó el imperio español. La frase pronunciada en presente y conjugada en plural es un índice que da cuenta de una larga memoria de resistencia reactualizada en cada coyuntura y conexiones que desbordan las fronteras de los Estados-Nación.

va en una de las pancartas "somos las hijas de Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña" y la marcha de mujeres que se llevó a cabo el décimo día de las protestas.

Tres elementos singularizan las protestas de esos días: el carácter nacional –se registraron manifestaciones en Costa, Sierra y Oriente–, heterogeneidad de actores movilizados –organizados y no organizados– y el uso de las redes sociales para la protesta. Diversos actores participan en las movilizaciones: transportistas, estudiantes, campesinos, pueblos y nacionalidades indígenas, mujeres, trabajadores, sectores populares, barrios, ecologistas, etc. La masividad se logra por la combinación de sectores sociales organizados, tejidos comunitarios y la amplia adhesión de sectores no organizados. La participación de jóvenes y mujeres –muchos de ellos politizados en esos días–, la diversificación de los repertorios de acción y el papel de las redes sociales ponen en evidencia la marca generacional de esa protesta.

Frente al cerco mediático de las grandes cadenas, los medios alternativos de comunicación jugaron un rol clave para informar sobre la situación del paro. Las redes sociales se usaron como espacio de protesta y confrontación, como medio de comunicación y organización y, también, para transmitir la protesta a nivel nacional e internacional.

El papel de la CONAIE fue clave a la hora de sostener y encausar –hasta cierto punto– la protesta. A diferencia de lo que sucedió en Chile o Colombia en donde era difícil encontrar representantes de protestas heterogéneas y magmáticas, en Ecuador ese papel fue asumido sobre todo por las organizaciones indígenas. Sin embargo, después de la movilización ha sido difícil gestionar los descontentos y articular las organizaciones sociales.

La pandemia de COVID 19 frenó las movilizaciones que habría de enfrentar el gobierno de Lenin Moreno y, a su vez, agudizó la crisis –creció la pobreza, el desempleo, la informalidad, la migración, etc.–, es decir, multiplicó las fuentes de conflicto. La nefasta gestión de la pan-

demia por parte del gobierno de Moreno dejó imágenes de horror que recorrieron el mundo: un número de muertos que nunca llegó a determinarse con exactitud en Guayaquil y varias familias a las que nunca se le entregó los cuerpos de sus familiares. Junto a ello, casos de corrupción ligados al manejo de hospitales y medicinas, dificultades para acceder a atención médica, límites para acceder a educación en un país con importantes brechas tecnológicas. La falta de legitimidad de las instituciones es comparable a la década de los noventa.

La implementación del modelo neoliberal ha encontrado límites –hasta cierto nivel– en Ecuador; sin embargo, el ciclo en el que estamos inmersos será de alta conflictividad porque se intentará imponer el neoliberalismo con mayor fuerza y este encontrará, nuevamente, su resistencia. La elección de Guillermo Lasso como presidente ha significado la profundización de la agenda neoliberal. Los acreedores internacionales presionan por el pago de la deuda contraída por los últimos gobiernos, la respuesta a la crisis generalizada ha sido mayores ajustes estructurales. Está en curso un programa de privatización estatal, flexibilización laboral, reducción de salarios. La conflictividad social crecerá, pero también la represión. Después de las movilizaciones del 2019, el aparato represivo ha sido fortalecido con mayor vigorización.

En síntesis, la intervención de los movimientos sociales tanto en la arena social como en la lucha institucional ha reconfigurado los escenarios clásicamente políticos. Su principal fuerza ha estado en su capacidad destituyente lograda por la articulación de actores heterogéneos y el respaldo de la mayoría de los ecuatorianos que veían representados sus intereses por los movimientos sociales. Pese a la generación de capacidad destituyente que tuvieron los movimientos, éstos muestran debilidades para negociar un cambio político y desplegar su proyecto al momento de transformar el Estado. Los partidos políticos que los relevan en la dirección extraen algunas orientaciones políticas de éstos, pero no son su expresión orgánica.

Los movimientos sociales se enfrentan al dilema histórico de los procesos de transformación: cómo enfrentar la condensación de las fuerzas sociales en el marco institucional y cómo renovar las fuerzas sociales, reconociendo que no se puede mantener la movilización de manera constante. Si bien una de las formas de atenuar la conflictividad ha sido la incorporación de las demandas de los movimientos sociales en la institucionalidad (legal o política), esta no tiene sentido sin una correlación de fuerzas que le sea favorable.

Los avances constitucionales y las contradicciones que surgieron después de esta han servido como puntos referenciales en la articulación de nuevas reivindicaciones: derechos de la naturaleza, Estado Plurinacional, interculturalidad, justicia indígena, etc. están siendo usados para forjar otros campos de conflictividad.

El principal desafío de las organizaciones y movimientos sociales está en la construcción del eje de articulación. Dos ejes tienen potencialidad para articular a diferentes sectores: la resistencia al neoliberalismo y la defensa de la naturaleza en términos anticapitalistas. La defensa de los territorios, el agua y la vida –que ha sido local en estos años– pueden convertirse en un eje de articulación en momentos de colapso climático.

Referencias

Becker, M. (2015). ¡Pachakutik! Movimientos indígenas, proyectos políticos y disputas electorales en el Ecuador. *Ecuador Debate*, (98), 177-179.

Chiriboga, M. (2001). El levantamiento indígena ecuatoriano de 2001: Una interpelación. Íconos–Revista de Ciencias Sociales, (10), 28-33.

CIA. (1973a). *Country Profile: Ecuador*. CIA. Freedom of Information Act Electronic Reading Room.

CIA. (1973b). *Ecuador. Government and Politics.* CIA. Freedom of Information Act Electronic Reading Room.

CONAIE. (1994). *Proyecto Político de la CONAIE*. https://conaie.org/proyecto-politico/

CONAIE. (2007). *Propuesta de la CONAIE frente a la Asamblea Constituyente. Principios y lineamientos para la nueva constitución del Ecuador por un Estado Plurinacional, Unitario, Soberano, Incluyente, Equitativo y Laico*. CONAIE https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/109339-opac

Hale, C. (2004). El protagonismo indígena, las políticas estatales y el nuevo racismo en la época del 'indio permitido'. *Paz y democracia en Guatemala: desafíos pendientes*. Memoria del Congreso Internacional de MINUGUA. 51-66. https://n9.cl/vd10t

Instituto Científico de Culturas Indígenas-ICCI. (2005, enero). *Los dilemas de la CONAIE. 70*. http://icci.nativeweb.org/boletin/70/editorial.html

Lanchimba Velastegui, S. (2016). *Ecuador y Bolivia: La disputa por transformar el estado en clave plurinacional* [Tesis de Maestría, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio institucional https://repositorio.unam.mx/contenidos/75973

Martín-Mayoral, F. (2009, junio). Estado y mercado en la historia de Ecuador. Desde los años 50 hasta el gobierno de Rafael Correa. *Nueva Sociedad*, (221), 120-137.

Túquerrez, L. (2020, octubre). *Entrevista a Allpa, Lourdes Túquerrez Maigua. Las jornadas de octubre en Ecuador desde la mirada de una warmi-kichwa.* (S. Lanchimba Velastegui) [Bajo el Volcán. Revista del Posgrado de Sociología. BUAP]. http://www.apps.buap.mx/ojs3/index.php/bevol/article/view/1545

We return, and we are millions: cycles of resistance in Ecuador

Sofia Lanchimba Velastegui
https://orcid.org/0000-0002-2064-3543
Universidad Amawtay Wasi, Ecuador
sofialanchimba@politicas.unam.mx

Abstract

The purpose of this paper is to outline the cycles of resistance that have unfolded during the last three decades in Ecuador. I focus basically on the indigenous movement. Conflict is the axis of analysis to study social mobilization. I use a process perspective to analyze the reconfiguration of the mobilization around the conflicts of each moment. The most significant mobilizations function as indices to build the cycles. I consider intensity, mobilized actors and the demands achieved. The intensification of conflict occurs when rights are limited and life in general becomes precarious due to the implementation of neoliberal programs. During these years there have been three cycles: 1) From the intense mobilizations that included the fall of presidents to the installation of the Constituent Assembly (1990-2008), 2) From the regrouping of social forces around territorialized conflicts to the explosion of a new resistance to neoliberalism (2008-2019) and 3) ongoing conflict (2019 to present).

Keywords: social movements, indigenous movement, neoliberalism, extractivism, constituent Assembly.